

ta, para que prolongar esa situacion haciéndolos esperar hasta que una nueva legislatura ordene la consolidacion? Se les perjudica por que no tienen esos valores de que pueden disponer, y se les perjudica, sin provecho para el Fisco, porque la ley de deuda interna dice que estos valores deben ganar intereses como los demas desde la fecha en que se dió la ley.

Si no hay economía fiscal, si no hay riesgo alguno porque el monto de la deuda está depurada dos veces; si vá á ser depurada por tercera vez, no hay motivo para retardar la expedicion de éste papel. Mas vale que francamente autoricemos su emision, conociendo el monto total que será el único objeto de la ley. Ya sabemos que los diez y ocho millones caben dentro de los cuarenta de la ley general; que no hay riesgo de pasar los limites de la emision; por consiguiente no hay motivo justo para retardar por mas tiempo el reconocimiento de esa deuda.

A medida que el Gobierno vaya reconociendo los expedientes y dando los decretos de conversion, la oficina respectiva irá emitiendo los vales: de otro modo demoraran mucho tiempo los expedientes con decreto del Gobierno y quedarán hasta el congreso venidero: todo esto sin beneficio de nadie y con daño del empleado. Mejores que retiremos los inconvenientes, que salvemos las dificultades, autorizando la emision de los bonos á medida que vayan reconociéndose por el gobierno. Si se acepta la operacion se daran los tres mil bonos de expedientes que se han reconocido en un año de trabajo, y de los que se terminen en el tiempo que trascorra hasta la próxima legislatura, aunque me parece imposible que se acaben los tres mil novecientos.

El señor *Elguera*.—La objecion hecha por el H. Sr. Eguigueren no habría tenido lugar si hubiera visto debidamente la Memoria de la Junta de Vigilancia. Dice la Memoria de la Junta de Vigilancia que los créditos reconocidos y por reconocer son los siguientes (leyó).

De suerte que todo esto suma catorce millones. La razon que allí se pone excede en cuatro millones, y no llegará sino á treinta y cuatro millones la deuda reconocida, nunca á cuarenta. Si esta partida estuviera separada de la relacion, efectivamente serían cuarenta y ocho; pero ahora no serían sino treinta y cuatro millones.

El señor *Eguigueren*.—Si el cálculo que he hecho ha sido equivocado, el

de su señoría tambien padece de un error, porque de los incisos quinto y sexto entran en este cálculo diez millones y medio, y como el cuadro asciende á diez y ocho, son treinta y ocho, muy parecidos á treinta y nueve.

El señor *Forero*.—En esos diez y ocho hay muchos millones que aun no están reconocidos; así es que es muy probable que no se admitan todos y que haya una fuerte rebaja sobre esa partida.

Cerrado el debate se procedió á votar y fueron aprobadas sucesivamente todas las conclusiones del dictamen.

En seguida S. E. levantó la sesion, designando para la orden del dia de la inmediata, la discusion del proyecto venido en revision sobre reforma de la ley de imprenta:

Por la redaccion—

MANUEL M. SALAZAR.

42.<sup>a</sup> Sesion del Jueves 18 de Setiembre de 1890.

(Presidencia del H. señor Candamo.)

Abierta la sesion con asistencia de los SS. Senadores: Quiñones, Ibarra, Elguerra, Rosas, Bamarén, Samanes, Torrico, García Calderon, Recabarren, Carranza, Morote, Lama T., García, Villanueva, Alarco A., Mujica, Oastillo, Torres, Menendez, Muñoz, Villagarcía, Leon, Olavegoya, Oardenas, Izaga, Arbulú, La Torre Gonzalez, Cisneros, Ganoza, Oanevaro, Revoredo, Najar, Lama G., Varela y Valle, Velez, Seminario, Montero, Ocampo Valdez, Bejarano, Forero, Ward, Vizcarra, Pinzás y Eguigueren, Secretarios, fué leida y aprobada el acta de la anterior, con la indicacion del señor Eguigueren de que la memoria de la Junta de Vigilancia, remitida al archivo segun aparecia del acta, se pasara á la comision Principal de Hacienda.

Se dió cuenta de los siguientes documentos:

*Oficios.*

Del señor Ministro de Justicia, remitiendo las copias solicitadas á indicacion del señor Lama G. de los supremos decretos por los cuales se ha concedido diversas licencias, sin sueldo, al doctor don José Aranibar, Fiscal de la Excmo. Corte Suprema, para permanecer en Europa.

A conocimiento del señor Lama G.



De S. E. el Presidente de la honorable Cámara de Diputados, participando que han sido aceptadas las modificaciones introducidas en revision por el H. Senado, al proyecto que reglamenta el servicio diplomático, con excepcion de las que se refieren á los artículos 11, 23 y 24 del expresado proyecto, y en las que ha resuelto insistir esa H. Cámara.

A la órden del día.

Del mismo, mandando en revision el pliego extraordinario del Presupuesto General relativo á los ramos de Justicia, Instruccion, Culto y Beneficencia.

Del mismo, acompañando con igual fin el pliego de las pensiones pasivas de los ramos de Gobierno, Policía y Obras Públicas, cuyas partidas fueron aplazadas.

A la comision de Presupuesto ambos oficios.

#### *Proyectos.*

Del señor Recabarren, disponiendo que los jefes ú oficiales del Ejército ó Armada que sin salir de la condicion de indefinidos sean destinados por el Gobierno á desempeñar cualquier empleo ó comision, perciban durante el tiempo de sus servicios las dos terceras partes de la pension que les corresponda, segun sus respectivas cédulas.

A la comision principal de Guerra.

De los señores Seminario y Eguiguren, declarando que los montepios de las viudas é hijas de los que sucumbieron en la batalla de Arica, y de las viudas é hijas de los que combatieron en el monitor «Huáscar» en Angamos, se sujeten á lo dispuesto en la ley de 28 de Octubre de 1889.

A la misma comision.

#### *Dictámenes.*

De la Comision de Presupuesto en el departamento de Tacna.

De la Principal de Hacienda en el oficio del Presidente de la Ilustrísima Corte Superior de Justicia de Arequipa sobre pago de sueldos atrasados.

A la órden del día ambos dictámenes.

#### *Solicitudes.*

De don G. Menchaca para que se consigne en el Presupuesto General, una partida con destino al pago de unas letras, conforme á la resolucion legislativa del caso.

A la Comision de Presupuesto.

Del preso Feliciano Miranda pidiendo indulto del tiempo que le falta para cumplir su condena.

A la Comision de Justicia.

Antes de la órden del día, el Sr. Canavearo pidió que se reiterase nota á la H. Cámara de Diputados expresándole que la recomendacion que se hizo del primitivo pedido de Su señoría, fué para que se aclarara la distribucion que debía hacerse de la partida 67 votada en el Presupuesto Departamental de Lima para obras públicas:

Así se dispuso.

El Sr. Arbulú propuso que el oficio del presidente del Tribunal Supremo de Responsabilidad pasado á la Comision de Justicia para dictamen, se pusiese á la órden del día, tanto porque dicha comision se encontraba incompleta, cuanto porque ésta nada tenia que decir sobre el particular por ser á su juicio el asunto objeto de un simple acuerdo de la cámara y no de una resolucion.

El Sr. Lama J. observó que la misma indicacion de su señoría podía ser el dictamen de la comision.

S. E. considerando la indicacion del señor Arbulú conforme con el reglamento á cuyo artículo pertinente se dió lectura, sometió el pedido á la deliberacion de la H. cámara y esta resolvió que el expresado oficio quedará á la órden del día.

El Sr. Pinzas expuso que se había sometido por el Gobierno á la H. Cámara de Diputados un proyecto sobre creacion de rentas judiciales poco mas ó menos igual al presentado por su señoría en ésta; y que con el fin de evitar el inconveniente que resultaría de que ambas cámaras se ocupasen á la vez de un mismo asunto, pedía que se acordase por la H. Cámara, si fuese posible, la remision de su proyecto á la otra cámara, por via de ilustracion.

Despues de varias indicaciones hechas por los señores Rosas, Canavearo y Cárdenas, el señor Pinzas retiró su pedido, aceptando la idea del Sr. Elguera de remitir de una manera particular copia del documento indicado á la comision de la otra cámara que entiende del proyecto del Gobierno.

#### ORDEN DEL DÍA.

Se leyó y puso en debate el siguiente oficio de la H. Cámara de Diputados, participando su insistencia en los artículos 11, 23 y 24 del proyecto que reglamenta el servicio diplomático.



## CAMARA DE DIPUTADOS.

*Lima, Setiembre 17 de 1890.*

Excmo. señor Presidente de la H. Cámara de Senadores.

La H. Cámara de Diputados en sesión de ayer, ha aceptado las modificaciones hechas por el H. Senado en el proyecto de ley que reglamenta el servicio Diplomático de la República, con excepcion de los siguientes artículos, en los que ha resuelto insistir, y que van marcados con tinta roja en la parte a que se refiere la insistencia.

## CAPITULO 3°.

*Sueldos viáticos y asignaciones.*

Art. 11. Los sueldos de los empleados diplomáticos se arreglarán a la siguiente escala.

«En la Corte de Londres y en los Estados de la América del Norte.»

AL AÑO

Enviados Extraordinarios y Ministros Plenipotenciarios.....	S. 14,000
Secretarios de 1.ª clase....	« 3,000

## CAPITULO 4°.

*Licencias.*

«Art. 23. Los jefes de legacion, no podrán ausentarse del lugar de su residencia por asuntos que no sean del servicio, por mas de veinte dias cada año. Para ausentarse por mas tiempo sin objeto oficial obtendrán previa licencia del gobierno. En todo caso deben participar las fechas del principio y del término de su ausencia.»

«Art. 24. Los secretarios y adjuntos, no podrán faltar al despacho, sin consentimiento del jefe de la legacion.»

VE., [se dignará dar aviso del dia en que el H. Senado tenga a bien discutir, estas insistencias; debiendo insinuar a VE. que en la misma sesión puede elejirse el miembro que falta para completar la comision que debe examinar el proyecto del Código de minería.

Dios guarde a VE.

MANUEL MARIA DEL VALLE.

El señor Presidente. — La Cámara de Diputados ha aceptado en parte las modificaciones introducidas por esta en el reglamento diplomático,

en cuanto al sueldo del representante en Londres; Aquí se puso veinte mil soles; mas lo particular es que allí se fijó catorce mil, pero en moneda fuerte. Aquí la Oámara fijó veinte mil de plata sellada. Así es que la Oámara de Diputados ahora es menos generosa de lo que lo fué al principio, por que solo fija catorce mil soles, pero no al cambio de cuarenta y ocho peniques como pretendió. Se trata, pues, de señalar el dia que debemos reunirnos en Congreso, para tratar de esta insistencia.

El señor Elguera.—Excmo. señor: Cuando vino el proyecto tenia un artículo que decía: que se pagaría á los Ministros en la moneda del país donde iban acreditados. El Senado rechazó esa parte; pero fué porque aumentó los haberes de los diplomáticos. Hoy, segun he visto en la publicación hecha de los debates de la Cámara de Diputados, no ha consentido sino en que la moneda sea del país. De suerte que cuando el cambio se ponga á treinta ó cuarenta peniques, los Ministros tendrán un sueldo menor que un Encargado de Negocios; de modo que allí hay una laguna que no sé como se ocupará de llenar la Cámara, porque si el Senado no se ocupó de esa parte que se refería al cambio de moneda fué por que aumentó el haber de la lista diplomática.

El señor Presidente.—Esas razones influirán en el ánimo de los representantes para que no acepten la modificación y se harán valer en la discusión. Es un artículo distinto el que fija los sueldos el que determina la forma de pago. Así es que la Oámara insiste en una modificación nuestra y no insiste en otra.

El señor Elguera.—Se rechazará lo que la Oámara aprobó y vendrá á quedar la lista diplomática pagada en la moneda del país.

El señor Canevaro.—Como la otra Oámara es la que insiste, no nos queda otra cosa que hacer que fijarle dia en que debemos reunirnos.

El señor Elguera.—He querido llamar la atencion de la Oámara para que sea lógica en insistir en lo que se ha resuelto.

Hecha por S. E. la consulta respectiva, la Cámara resolvió reunirse en Congreso el Lunes próximo para tratar de la insistencia.

Se leyó y puso en discusión el siguiente proyecto:

*El Congreso etc.*

Considerando:

1.º Que el Consejo Provincial del



cercado del Cuzco, necesita de locales aparentes para el establecimiento de Escuelas de Instrucción Primaria.

2.º Que el conocido con el nombre de Cuartel de Mutuchaca, en la ciudad del Cuzco, reúne esas condiciones y es de propiedad Nacional, y

3.º Que teniendo el citado Concejo la posesión de dicho fundo, por adjudicación que se le hizo por el Gobierno provisorio del General Oceres en decreto de 24 de Setiembre de 1884.

Ha dado la ley siguiente:

Artículo único. Adjudicase en propiedad al Concejo Provincial del Cercado del Cuzco, el local nominado «Cuartel de Mutuchaca» para el establecimiento de escuelas de instrucción primaria ó normales.

Comuniquese etc.—Lima Setiembre 17 de 1890.

*Manuel O. Torres. — Juan Ibarra.*

El señor *Torres*.—Excmo. Sr. — El cuartel de Mutuchaca es un edificio que antes formaba una sección del convento de jesuitas, el mismo que fué adjudicado al Gobierno. Ese convento estaba dividido en dos claustros; el primero ha sido adjudicado a la Universidad del Cuzco, y el segundo ha sido aplicado a distintos objetos; pero las mas veces ha servido de cuartel, apesar de no prestar comodidades para ello. Ese edificio, hace pocos años estaba en estado útil; pero una temporada de dos ó tres años que permaneció allí la gendarmería lo arruinó completamente, al extremo de que su jefe hizo cortar los tirantes de los techos y los pilares de los corredores bajos. de este modo los techos sin tirantes se han desplomado y los corredores altos tambien, porque les ha faltado el apoyo.

Ahora no tiene el edificio sino tres ó cuatro cuartos útiles en los bajos; de los cuales dos sirven de escuela de niñas y el tercero de escuela taller de bojalateros. Y si han podido servir para estos objetos, es por el gasto que la Municipalidad ha hecho.

La Municipalidad, con el empeño que tiene en mantener en buen estado los bienes pertenecientes al municipio, si se le adjudica esta propiedad reparará ese local y lo aplicará a la formación de escuelas de ambos sexos y los bajos deben servir de escuela taller. Pero la Municipalidad, al presente, no quiere emprender gasto alguno, ni ha ocurrido a la erogación de los vecinos para refeccionar el local, porque no está animada a hacer estos gastos, ni el vecindario erogaría nada, desde que la propiedad del

local le está adjudicado solo por decreto supremo; y despues de refeccionarlo y ponerlo en estado útil la Municipalidad, podía el Gobierno, por medio de otro decreto, darle una aplicación distinta a la que le ha dado la Municipalidad. En el día ese local no es sino un solar, un canchón, y su valor no podrá pasar de dos á tres mil soles; pero refeccionado ahora será la Municipalidad lo que ahora paga por arrendamiento de escuelas en casas particulares. Por estas consideraciones espero que el H. Senado se dignará aprobar el proyecto que hemos presentado los cuatro Senadores del Departamento del Cuzco.

Dado el punto por discutido se procedió a votar y fué aprobado el proyecto.

Se leyó el dictámen que sigue de la Comisión Auxiliar de Legislación, en el proyecto venido en revisión sobre reforma de la ley de imprenta.

#### COMISION AUXILIAR DE LEGISLACION.

Señor:

La experiencia ha demostrado el poderoso influjo que la prensa ha ejercido y ejerce en el desarrollo progresivo de las sociedades. La palabra reproducida y llevada hasta los últimos confines de los pueblos, permite a cada inteligencia enriquecerse con los descubrimientos y adelantos que se realizan en las diversas regiones del mundo. Es el acumulador mas poderoso de las fuerzas intelectuales, llamado a dominar los errores y las preocupaciones, abriendo cada día nuevos horizontes al mejoramiento incesante del espíritu del hombre.

Vuestra Comisión no puede, pues, remitir a duda la fuerza civilizadora de la imprenta, ni la conveniencia de que disfrute de la libertad indispensable para realizar su importantísima misión. Por desgracia no siempre se mantiene dentro de sus propios límites; y cuando ella emplea sus poderosos recursos en mal sentido, extravía las ideas, pervierte los sentimientos y engendra perturbaciones sociales, que a las veces no siempre se pueden dominar ni por la acción combinada de todos los poderes públicos.

Es una arma de dos filos, que caminando en un sendero, siega indudablemente los efectos de la ignorancia, pero que llevada en sentido opuesto, se convierte en veneno de males de suma trascendencia. Tal es la razón por la que la ley, respondiendo al precepto constitucional, declara que todos pueden hacer uso



de la imprenta, para publicar sus escritos sin censura previa, y reprimir los abusos señalando la responsabilidad civil y criminal á que se hacen acreedores los que indebidamente se lanzan al terreno del abuso.

La ley que con tal objeto se promulgó en 12 de Noviembre de 1823, y que rige hasta hoy entre nosotros, adolece de muchos defectes; no se halla en armonía con las disposiciones genales del fuero común, y establece un procedimiento que rara vez conduce al resultado que exige la justicia. Esa ley, copiada casi literalmente de la que se dió en España el 22 de Octubre de 1820, requiere reformas sustanciales, á fin de que la libre emision del pensamiento tenga las mas solidas garantías, mientras se ejercite sin vulnerar los derechos individuales ó sociales, y alcance el castigo que merezcan sus extravíos, mediante la aplicacion de penas que no repugnen al buen sentido, como la de sepultar cadáveres durante algunos meses; y otras que no guardan la proporcionalidad debida entre el delito y el castigo.

El proyecto enviado en revision por la honorable Cámara de Diputados, envuelve la reforma que en esta materia se requiere. Clasifica con precision los delitos y faltas de imprenta; señala las penas que merecen unos y otras; determina las personas responsables; establece el procedimiento que corresponde á los juicios, y fija el término de la prescripcion para este género de delitos. Vuestra Comision lo considera aceptable con las ligeras modificaciones que pasa á indicar.

Art. 1.º En este artículo se dispone que toda publicacion debe llevar la designacion del taller, el nombre del impreor y el lugar y fecha de la impresion. Como el editor es el que saca á luz, ó publica la obra ó el artículo de que se trate, es él quien debe responder ante la justicia, y no el simple impresor, que por lo regular está encargado solamente de la parte material de la impresion.

Aunque en la clasificacion de delitos, contenida en el artículo 8.º se ha procurado guardar armonía con las disposiciones del Código Penal vigente, no se ha llenado del todo ese laudable propósito. Para alcanzar esa armonía entre la ley de imprenta, el Código Penal y la ley de 29 de Octubre de 1878, vuestra Comision es de sentir que desecheis los cuatro primeros incisos del artículo 8.º y en su lugar aproveéis los siguientes:

Art. 8.º Son delitos de imprenta:

1.º La publicacion de impresos que conspiren directamente á abolir ó variar en el Perú la religion que la Nacion profesa y el Estado protege, ó á la práctica de los delitos comprendidos en los artículos 100 á 107 inclusive del Código Penal.

2.º La publicacion de impresos que tiendan á la ejecucion de los delitos consignados en los artículos 125 y 126 del citado Código Penal, esto es, que tiendan á destruir ó alterar por vías de hecho la Constitucion política del Estado, ó que inciten á su inobservancia, ó desconocimiento del orden constitucional, representado por la autoridad legal del Congreso, del Ejecutivo y del Poder Judicial de la Nacion.

3.º La publicacion de impresos, doctrinas, máximas ó noticias, dirigidas á excitar la rebelion, sedicion, motin ó asonada variando la forma de Gobierno, estableciendo el régimen dictatorial, aunque sea transitorio, ó practicando cualquiera otro de los delitos de que se ocupan los artículos 127, 133 y 138 del referido Código Penal.

4.º Toda incitacion para desobedecer alguna ley ó alguna autoridad legítimamente constituida.

Art. 9.º El inciso 2.º de este artículo que considera como delito de imprenta la publicacion de piezas oficiales de los sumarios criminales mientras no se hayan terminado, es inadmisible, á juicio de vuestra comision, porque se halla en pugna abierta con el artículo 127 de la Constitucion del Estado, que declara que la publicidad es esencial en todos los juicios.

En el inciso 4.º del mismo artículo, que considera como delito la publicacion de noticias falsas, no es justo en los términos generales en que está concebido. Para haver delito en esa publicacion es necesario que sea maliciosa; y conviene agregar esta calidad á dicho inciso.

Art. 13.º La misma razon que se alega para librar de pena á los que prueban la realidad de la imputacion de delitos á los empleados públicos ó corporaciones, existe en favor de los que acrediten las imputaciones de delitos perpetrados por los gerentes, directores ó representantes de las sociedades anónimas. Por consiguiente á juicio de vuestra comision el artículo 13 debe redactarse en estos términos:

Art. 13 Si en algun escrito se imputase delitos perpetrados en el ejercicio de sus funciones por empleados públicos, corporaciones, ó gerentes,



directores ó representantes de sociedad anónimas, y el autor ó editor acreditasen su aserto, quedarán libres de toda responsabilidad civil y criminal.

La falta de una sancion penal bien concebida para las injurias y calumnias perpetradas por la prensa es la causa de que la maledicencia criminal haya tomado en nuestra sociedad un incremento escandaloso, que es necesario reprimir, á fin de que impunemente no se manille el honor, ni se ofenda la buena reputacion. Los artículos 284 y 288 del Código Penal imponen á las injurias y calumnias respectivamente tres y cuatro años de reclusion; y multa de 20 á 200 pesos; y en el proyecto, á pesar de que el delito está agravado con la publicacion por la prensa, se rebaja en ambos casos un grado de la pena. Sus autores han considerado con sobrada razon, que siendo muy variada la gravedad de esos delitos, las mas veces quedan impunes, porque los jueces se resisten á infringir penas desproporcionadas. Vuestra comision opina del mismo modo, pero no piensa que el mal se encuentra en la gravedad de la pena, sino en que sea la misma para todos los casos, y por consiguiente conceptúa indispensable que la ley procure la proporcionalidad, estableciendo el máximun y el mínimun dentro de los cuales el juez encuentre el merecido castigo para cada caso.

Otro de los motivos que contribuyen á que no tengan debida aplicacion las penas que al respecto impone la ley vigente, consiste en que la reclusion asume el carácter de pena principal, y la multa de secundaria ó accesoría. Cambiando los caracteres es decir, estableciendo que la multa sea la pena de las injurias y calumnias y que la reclusion se reserve para los casos en que aquella no se quiere ó no se pueda pagar, la ejecucion de la justicia será fácil y la impunidad bien difícil.

Las consideraciones expuestas conducen á desechar el artículo 19 del proyecto y á sustituirlo con el siguiente:

Art. 19 La infraccion prevista en el inciso 6.º del artículo 8.º se castigará con las siguientes penas:

1.º Si la injuria consistiese en la imputacion de un delito en que no tenga obligacion de acusar el Ministerio Fiscal, se impondrá multa de 200 á 1800 soles. Si el reo no quisiese ó no pudiera pagar la multa, sufrirá reclusion del primero al tercer grado.

2.º Si la imputacion no fuese de delito, se impondrá la multa de 200 á

600 soles, ó en defecto de pago, reclusion en primer grado.

El reo de calumnia será castigado con un grado mas de pena que el injuriante, esto es, con multa de 600 á 2,400 soles, ó en caso de falta de pago, con reclusion del primero al cuarto grado.

En todos estos casos se puede aplicar la reclusion en sus términos mínimo y medio, debiendo computarse la multa á razon de 200 soles por cada término.

El artículo 21 debe desecharse, porque se refiere al castigo por la publicacion de piezas de un sumario, que, á juicio de vuestra comision, no constituye un verdadero delito.

Los artículos 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32, que constituyen el capítulo IV, no los acepta vuestra comision. Se ocupan de señalar la responsabilidad del impresor, editor y director de las publicaciones por la prensa, y determinar las personas que legalmente deben considerarse como tales. El ofendido por una publicacion nada tiene que ver desde luego con el impresor, director ó administrador de una imprenta; á él no le compete otra accion que la de perseguir al que ha dado á luz el impreso ofensivo, que es la persona conocida con el nombre de editor. De otro lado, nó hay razon para recargar el procedimiento con la citacion del impresor primero, con la del editor despues, con la del director en seguida, y por último con la del editor. A fin de simplificar el procedimiento, vuestra comision os propone que desecheis los artículos 26, 27, 28, 29, 30 y 31, y que en su lugar aprobéis los siguientes:

Art. 26. El editor, cuyo nombre debe figurar en toda publicacion, es inmediatamente responsable de los delitos y faltas que se cometan en las publicaciones que salgan de sus talleres.

Art. 27. Cesa la responsabilidad del editor desde que exhiba ante el juez el documento en que conste la garantía del que contestó la publicacion. Este documento es el único medio de acreditar la irresponsabilidad.

Art. 28. El editor de un periódico es responsable de los escritos que aparezcan en las secciones que no están á disposicion del público, y de aquellos que se publiquen en las secciones que están á disposicion de éste, siempre que no tuviesen autor determinado.

Art. 29. Será autor para los efectos de esta ley, la persona que garantiza con su firma el original que



sirve para la publicacion, y editor el que dá á luz las publicaciones.

Art. 30. El autor y editor deben ser vecinos del lugar, mayores de edad y estar en el pleno ejercicio de sus funciones.

Art. 31. Si el editor no dá razon exacta de la moralidad del autor, ó si resulta que este no tenía, en el instante de la publicacion, los requisitos del artículo precedente, será responsable del escrito denunciado.

Art. 36. En este artículo debe sustituirse el Concejo Provincial á la Junta Directiva de dicho Concejo, que esta destinada á desasorecer en la nueva organizacion municipal.

Art. 37. Es enteramente inútil, y debe desecharse, porque se limita á indicar que en los artículos subsiguientes se detallarán las atribuciones y el procedimiento de las autoridades designadas en los anteriores.

En el artículo 63 se permite que el reo se liberte de la prision dando fianza de haz solo cuando el delito merece pena de multa ó de arresto. Desde que vuestra comision propone la multa como pena principal, de los delitos de imprenta y solo admite la reclusion como supletaria, no encuentra motivo para que en cualquier caso no se ponga en libertad al reo bajo fianza. Por esta razon dicho artículo debe redactarse en estos términos.

Art. 63. El reo puede libertarse de la prision dando fianza de haz conforme á las leyes.

Art. 66 Segun el Código de Enjuiciamientos en materia criminal cuando el reo está ausente se le llama por edictos de quince en quince dias. No hay razon para que con los reos de delitos de imprenta no se proceda del mismo modo, sin perjuicio de nombrarles oportunamente un defensor, con quien continúe el juicio hasta que se pronuncie la sentencia.

No es justo que la sentencia pronunciada contra el reo ausente, se considere ejecutoriada con la simple citacion del defensor; porque es posible que éste, en muchos casos, no conozca con exactitud los hechos, ni las circunstancias que puedan atenuar ó extinguir la responsabilidad criminal, y dé lugar involuntariamente al castigo del inocente. La sentencia debe reservarse para notificarla al reo, si se presenta antes que se circunde el término señalado para la prescripcion de la pena que imponga, ó para que se archive luego que ese término se venza. En consecuencia, vuestra comision es de sentir que se deseche la segunda parte

del artículo 66 y que se apruebe la siguiente:

«Si el reo no estuviese presente en el lugar del juicio, el juez lo llamará por medio de edictos, señalándole en cada uno el término de quince dias para que se presente á estar á derecho, y le nombrará defensor, con quien continuará la causa hasta pronunciar sentencia.

Esta sentencia se reservará en el juzgado para notificarla al reo luego que se presente ó sea aprehendido, á fin de que pueda apelar de ella dentro del término legal.

El capítulo XII, que se ocupa de la prescripcion de los delitos cometidos por la prensa, merece algunas ligeras modificaciones á fin de que guarde armonía con los principios que rigen en nuestra legislacion penal. A juicio de vuestra comision, los artículos que lo componen deben concebirse en los términos que siguen:

Art. 84 «El derecho de acusar por delitos de imprenta, ó sea la accion para denunciar un impreso como justificable y pedir la pena correspondiente, prescribe á los seis meses contados desde el dia en que se puso en circulacion».

Art. 85 Cuando se trate de impresos en que se injurie ó calumnie á particulares, el derecho de denunciar y acusar prescribirá á los tres meses para los presentes, y á los seis para los ausentes.

Art. 86 Desde que se inicia la accion, el término de la prescripcion se contará desde la fecha del último acto del procedimiento, y vencido dicho término, no podrá proseguirse ni renovarse la instancia.

Art. 87 Las penas prescriben dentro del término que le señala el Código Penal, excepto la de multa que quedará prescripta al año de haberse ejecutoriado la sentencia que la impone.

Las demás disposiciones que contiene el proyecto sometido á vuestra ilustrada revision, se encuentran en perfecta armonía con los principios de justicia que rigen sobre la materia y consultan al respecto los adelantos conquistados por la ciencia, revelando un inteligente trabajo en sus autores.

Con tal motivo, vuestra comision os pide que lo aprobeis con las modificaciones indicadas en el cuerpo de este dictamen, y con cargo de redaccion, á causa de que dichas modificaciones exigen en algunos artículos el cambio de palabras, que, sin alterar en nada la substancia, conserve la armonía que debe existir en-



tre todas las disposiciones de una ley.

Desé cuenta.

Sala de la Comision.

Lima, Setiembre 5 de 1890.

*Emilio Forero—Felipo Varela y Valle  
Fernando Morote.*

El señor *Presidente*.—Está en discusion general el proyecto venido en revision.

El señor *Villagarcía*.—Solo están impresos los dictámenes de la comision de la Cámara de Diputados; pero no lo aprobado por la cámara.

El señor *Carranza*.—Lo que ha sucedido con esta ley es lo siguiente: el ministerio pasó un proyecto del Sr. Villagarcía como Ministro de Justicia; ese proyecto fué alterado por la comision de la Cámara de Diputados, y una vez aprobado ha pasado al Senado. Aquí ha sufrido modificaciones. Asi es que lo que se discute es lo que fué aprobado en la Cámara de Diputados con las alteraciones introducidas por la comision del Senado, alteraciones que acaban de leerse. Para tener una idea mas clara será menester tener á la vista lo aprobado en la Cámara de Diputados y luego el dictamen de la comision. Este dictamen se ha publicado en «El Comercio».

El señor *Bambaren*.—Excmo. Sr.: Seria conveniente que antes de proceder á la discusion se repartiera á los Senadores un ejemplar del dictamen. El asunto es demasiado grave, porque se trata, nada menos, que de amordazar las manifestaciones del pensamiento; de lo que hay de mas libre y mas importante para el hombre; y es preciso que eso no se haga sino despues de haber visto y meditado bien. Porque sucede actualmente que cuando todos los pueblos del mundo tienden á la libertad, nosotros despues de la guerra queremos ir siempre hácia atrás; queremos coartar todas las libertades, y para hacer todo eso es necesario que meditemos un poco. Por eso deseo que se reparta á los Representantes un ejemplar del dictamen de la comision del Senado.

El señor *Presidente*.—Muy justo y muy razonable es el deseo del H. Sr. Bambaren. Hace dias que se mandó hacer la impresion del dictamen y si no se ha distribuido tal vez habrá habido descuido en la Secretaría.

El señor *Rosas*.—En este momento han llegado las impresiones.

El señor *Presidente*.—En el diario que publica las sesiones de las Cámaras está este dictamen. El H. Sr.

Bambaren que con razon se interesa tanto en este asunto, ha podido leerlo en «El Comercio».

Evidentemente que lo que se ha repartido es el proyecto original de Gobierno, que ha sufrido alteraciones en la Cámara de Diputados; pero si hubiese el deseo de la publicacion que manifiesta el H. Sr. Bambaren, creo que el proyecto está ya publicado. Asi es que si se cree que hay los elementos necesarios para entrar en la discusion de un asunto que consta de mas de noventa artículos, y que conforme al reglamento hay que discutirlos y aprobarlos de uno en uno, debemos entrar en la discusion general; porque si demoramos mucho quizá no alcance el tiempo en esta legislatura.

El señor *Bambaren*.—No habria ningun mal, Excmo. Sr. Se tardaria mas en amordazar la prensa. Eso seria todo lo que podría suceder.

El señor *Presidente*.—No digo que el aplazamiento sea un mal; pero la Cámara no podría ocuparse de otra cosa que de este asunto en el tiempo que le falta.

El Sr. *García Calderon*.—Excmo. Sr. Me ocurre una duda. En los cuadernos que se han repartido veo en las primeras páginas hasta la sexta el proyecto presentado por el Sr. Villagarcía como ministro; despues, en las páginas siguientes, hay un proyecto suscrito por varios señores diputados; pero resta saber si ese dictamen fué aprobado íntegramente ó con modificaciones.

El señor *Presidente*.—Podemos hacer lo siguiente: vamos á leer munuscritos los originales que califican los delitos de la prensa en la parte que se aprobó en la Cámara de Diputados y lo que propone la comision; si estamos conformes podremos entrar en la discusion general. Mientras vienen los documentos nos ocuparemos de otro asunto.

En consecuencia se suspendió la discusion del proyecto.

Se leyó y puso en debate el siguiente dictamen de la Comision de Presupuesto en el departamental de Tacna:

#### COMISION DE PRESUPUESTO.

Señor:

Vuestra Comision ha examinado el proyecto de presupuesto que para el año 1891 ha aprobado la Honorable Cámara Legisladora con destino al departamento de Tacna y despues de examinarlo, pasa á emitir el dictamen que le corresponde.



**Ingresos**—El pliego de ingresos que se compone de diez partidas, con un total de S. 20,706 viene con tan pequeñas diferencias en la parte que se refiere á contribuciones y demás ramos, que nada tiene que decir sobre ellas.

No sucede lo mismo en lo relativo á la subvencion que el Presupuesto general de la República, consigna para saldar los gastos déficit de ese Departamento, porque nota con agrado que de los S. 8932 soles destinados á este objeto; solo se necesitan hoy S. 5532 80, lo que prueba que hay un pequeño aumento en sus recursos naturales.

**Egresos**—En las veinte y siete partidas de que se compone el pliego de este ramo, no se ha hecho ningun cambio con relacion á las que vota el presupuesto vigente y en tal concepto se propone las siguientes conclusiones:

1<sup>a</sup> Que apruebeis el pliego de ingresos para el Departamento de Tacna para el año de 1891 ascendente á la suma de S. 20,706; y

2<sup>a</sup> Que apruebeis igualmente el el pliego de egresos para el mismo año con un rendimiento igual al anterior.

Dése cuenta.—Sala de la Comision—Lima, Setiembre 17 de 1890.

Francisco de P. Muñoz—M. Adrian Ward—Agustin G. Ganoza—José Geracio Arbulú—Oelso Bambarén.

Sin observacion se procedió á votar cada una de las conclusiones y fueron aprobadas así como las partidas del Presupuesto á que se refieren, y son las siguientes:

### Ingresos.

1 Contribucion personal.....	S. 4000
2 Id de id rústicos.....	7650
3 Id id patentes é industrial	2005 28
4 Id. eclesiástica.....	78
5 Productos del papel sellado	500
6 Multas judiciales.....	40
7 Impuesto de la alcabala de enagenacion.....	200
Derechos por las herencias que corresponde al Fisco.....	
Derechos del cuatro por ciento de las herencias, donaciones y legados á personas extrañas.....	100
Derechos del dos por ciento de las gerencias, donaciones y legados á personas trasversales.....	
8 Subvencion consignada en el Presupuesto General para el Médico titular....	600
9 Subvencion consignada en el Presupuesto General	

para cubrir el déficit del Departamento ..... 5532 80

S. 20706 11

### Egresos.

#### Servicio administrativo departamental.

1 Para gastos de escritorio de la honorable Junta departamental..... 8

#### Ramo de Gobierno.

2 Para un prefecto..... 3000  
3 Id. un secretario..... 1200  
4 Id. un archivero amanuense 600  
5 Id. ayudante subteniente... 600  
6 Id. un portero..... 96  
7 Id. un subprefecto del Cercado..... 1200  
8 Id. un subprefecto de la provincia de Tarata..... 1200

#### Gasto material.

9 Para arrendamiento del local que ocupa la prefectura 240  
10 Id. arrendamiento de locales que ocupan los subprefectos del Cercado y Tarata... 144  
11 Id. útiles de escritorio de la secretaría prefectural.... 96

#### Ramo de policía.

12 El sostenimiento de la fuerza de policía que se compone de un piquete de gendarmes de caballería para las dos provincias de este departamento, se hará por el Gobierno con las sumas que con tal objeto vota el Presupuesto General de la República..... 8384

#### Ramo de Justicia, Instruccion y Beneficencia.

13 Para el sostenimiento de la Corte Superior de Justicia del Departamento de Arequipa en la proporcion que le corresponde..... 1038  
14 Id. un juez de 1<sup>a</sup> Instancia del Cercado y de Tarata... 1440  
15 Id. un portero alguacil del despacho de la judicatura de 1<sup>a</sup> Instancia de la capital del Departamento..... 96  
16 Id. un médico titular..... 600

#### Gasto Material.

17 Id. gastos de escritorio para el juez de 1<sup>a</sup> Instancia.. 1800

#### Instruccion primaria

18 Id. la subvencion de las escuelas de instruccion primaria en los Distritos de Sama, Locumba é Ilabaya.. 1800



- 19 Id. la subvencion de las escuelas de Candarave, Curi-baya y Ticaco..... 1800

*Ramo de Hacienda.*

- 20 Para un tesorero..... 1200  
21 Id. un auxiliar..... 966  
22 Id. un archivero amanuense 600  
23 Id. un portero..... 96

*Gasto material.*

- 24 Id. útiles de escritorio de la tesorería y porte de correspondencia..... 60  
25 Id. arrendamiento de la casa de la tesorería..... 96

*Gasto de recaudacion*

- 26 Id. los dos apoderados fiscales y gastos en la formacion de matrículas y recaudacion de contribuciones..... 2000

*Extraordinarios.*

- 27 Id. los que ocurran en este Departamento, como son en la reparacion de caminos, puentes, correspondencia y conduccion de papel sellado..... 500

Total de Egresos.....S. 20706

Se leyó y puso en debate el siguiente oficio del Presidente del Supremo Tribunal de Responsabilidad;

*Lima, Agosto 22 de 1890.*

Señor Secretario del Congreso:

Segun disposicion expresa de la ley, el personal elegido para constituir el Tribunal de Responsabilidad Judicial, debe ser renovado en la actual Legislatura; pues ese cargo fenecce al mismo tiempo que el período constitucional del Presidente de la República.

Con acuerdo de mis respetables colegas, tengo el honor de dirigirme a USS. HH. á fin de que se sirvan dar cuenta de jسته oficio al Excmo. Congreso; pues legalmente no debemos continuar en el desempeño de una funcion pública cuyo término ha concluido.

Dios guarde á USS. HH.

*R. Ribeyro.*

El señor Presidente.—Será prudente que veamos la ley á que se hace referencia.

El señor Secretario.—Leyó la ley de creacion del Tribunal.

El señor Izaga.—Dice la ley que despues de proclamar al Presidente, se nombrara á los miembros de ese

Tribunal. Como hemos proclamado presidente, ha llegdo el caso de hacer la eleccion de miembros de dicho Tribunal.

El señor Rosas.—Pero la ley dice que los miembros del Tribunal durarán cuatro años, y como estos han sido elegidos ahora dos años, no han cumplido su período.

El señor Secretario.—Leyó el artículo pertinente á la ley.

El Sr. Varela y Valle.—El cuatrienio legal no se refiere á los que componen el Tribunal de Responsabilidad, sino al Presidente de la República; por consiguiente, si ellos fueron elegidos hace dos años, ese es el tiempo que corresponde al cuatrienio legal actual.

El Sr. Rosas.—En qué tiempo se deben elegir? Se eligen cuando es elegido el Presidente de la República que dura cuatro años; se vuelven á renovar al cuatrienio; luego deben durar cuatro años los miembros del Tribunal de Responsabilidad.

El Sr. Izaga.—¿Cuáles son los cuatrienios legales? uno es del 86 al 90, otro es del 90 al 94. Ya espiró el primero; así es que ya ha espirado la jurisdiccion de esos señores.

El Sr. Rosas.—Eso estaría bien, en el caso en que se hubiera hecho la eleccion al comenzar el período del Presidente; pero entónces no se quiso elegir; así es que los miembros del Tribunal no han durado los cuatro años.

El Sr. Presidente.—La nota que pasa el señor Ribeyro, Presidente del Tribunal, dice lo siguiente.

El Sr. Secretario.—Volvió á leer el oficio.

El señor Rosas.— Esa opinion se basa en que se supone que comenzaron á ejercer sus funciones al principio el cuatrienio; pero los actuales miembros del Tribunal no tienen sino dos años; por consiguiente no han llegado á cumplir su período.

El señor Pinzás.—Creo que lo que quiere decir la ley es que en el cuatrienio legal se haga la eleccion; pero que no pueden seguir despues de la proclamacion de presidente; por que han terminado su mision. La prescripcion imperativa es que inmediatamente despues de la proclamacion de Presidente se eliga á los miembros del Tribunal de Responsabilidad, pero no dice que han de durar cuatro años.

El señor Izaga.—Los legisladores, al dar esa ley, si hubieran querido que fuera de cuatro años la duracion de los miembros del Tribunal de Responsabilidad, lo hubieran dicho; lo que han querido es, que se eligan



después de la elección de Presidente. Ya hemos proclamado Presidente, vamos pues á elegir nuevos miembros del Tribunal. Así también lo entiendo éste en la nota que ha pasado. En cuanto á su permanencia, es legal; por que los jueces, mientras no son reemplazados por otros, siguen funcionando legalmente.

El señor *Rosas*.—No hay mas que hacer esta reflexión. El Tribunal no puede dejar de existir un momento; luego debe comenzar con el Presidente de la República, por que si no, habría un espacio de tiempo en que no existiría Tribunal ó tendría que estar funcionando el otro que que termino su periodo cuando lo terminó el Presidente.

Luego debe elegirse al mismo tiempo, por que de otra manera tiene que quedar un vacío que tendría que ser suplido por los que estaban funcionando, á los que se podría declarar, como se declara á los actuales, sin autoridad para funcionar. Luego la lógica manifiesta que los funcionarios del Tribunal de Responsabilidad deben elegirse con el Presidente, y por consiguiente, que deben durar cuatro años; de modo que cuando se han elegido dos años después ya no se sabe como debe aplicarse el precepto legal, si realmente están en situación de terminar, ó si todavía tienen dos años de vida. Eso es lo que ha pasado.

El Sr. *Izaga*.—No hay interregno en las funciones judiciales; porque aunque se haya reemplazado á un juez, éste ejerce jurisdicción hasta tanto que el otro no haya tomado posesion del cargo. Eso se hace por disposicion expresa de la ley.

El Sr. *Presidente*.—Que los actuales miembros del Tribunal puedan durar cuatro años en el cargo, es materialmente imposible; porque ó duran mas ó ménos de cuatro años. Ellos creen que deben durar menos, y que debe procederse á nueva elección.

Oerrada la discusion, se precedió á votar y la Cámara resolvió que se procediera por el Congreso á la elección del nuevo personal que debe componer el Superior Tribunal de Responsabilidad durante el actual cuatrienio constitucional.

Continuó el debate suspendido sobre la reforma de la ley de imprenta dando el señor Secretario lectura al siguiente proyecto aprobado por la H. Cámara de Diputados.

*El Congreso etc.*

Considerando:

Que la Constitución de 1860 garantiza ampliamente la libertad de la prensa, y la ley reglamentaria de 1823 es restrictiva y defectuosa, contrariando el espíritu de la ley fundamental; y

Que es indispensable poner en armonía todas las disposiciones legales que se refieren á la prensa;

Ha dado la ley siguiente:

I.

DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 1.º Todos pueden hacer uso de la prensa para publicar sus pensamientos sin censura previa. La libertad de la prensa no está sujeta á mas restricciones y responsabilidades que las establecidas por esta ley.

Art. 2.º Se considera sujeta á esta ley toda manifestacion del pensamiento por medio de la imprenta, litografía, grabados, fotografía ú otro procedimiento mecánico ó químico para la reproduccion de las palabras, signos ó figuras sobre papel, tela, madera ó cualquier otro material. Los dibujos, grabados, litografías, fotografías, medallas, emblemas, viñetas, se consideran sugetos á esta ley, y conforme á ella son justificables, aun cuando aparecieren solos y no en el cuerpo de otro impreso.

Art. 3.º Todo trabajo de prensa se reputa publicado y en circulacion desde que de la imprenta ó talleres en que se hubiere hecho el trabajo, se hayan extraído mas de seis ejemplares.

De esta disposicion se exceptúan los carteles que caen bajo la jurisdicción de esta ley desde que alguno de ellos haya sido fijado en cualquier lugar público. También se reputa publicado y en circulacion un impreso, dibujo, grabado, fotografía ú otro objeto análogo, desde que haya un ejemplar expuesto al público en tienda, almacén ú otro lugar adecuado.

Art. 4.º Toda publicacion por medio de la prensa debe llevar la designacion del taller, el nombre del impresor y el lugar y fecha de la impresion.

Art. 5.º Todo impresor sea tipógrafo, litógrafo, grabador ó de cualquiera otra denominacion, está obligado á remitir un ejemplar de las obras que salgan de sus talleres, á la



Alcaldía Municipal y otro al Agente Fiscal, ó en su defecto á uno de los Síndicos municipales. Remitirá además dos ejemplares á la Biblioteca Nacional. La remision debe hacerse en el acto en que la obra se ponga en circulacion.

Art. 6.º Exceptuase de las prescripciones de los dos artículos anteriores, los impresos que solo sirven para las necesidades de la industria y del comercio, de la vida doméstica ó social, tales como formularios, tarifas, etiquetas, tarjetas y otros impresos del mismo género.

Art. 7.º Sin prévia declaracion de ser justiciable un impreso, no podrá obligarse al impresor á declarar el nombre del autor ó editor de la obra.

La contravencion á este precepto se castigará con arresto mayor en tercer grado y suspension de los derechos políticos por dos años.

## II.

### DELITOS Y FALTAS.

Art. 8.º Son delitos de prensa:

1.º La publicacion de impresos que conspiren directamente á abolir de hecho la religion que la Nacion profesa y el Estado protege;

2.º La publicacion de impresos que ataquen la Constitucion política de la República, incitando á establecer de hecho otra forma de Gobierno ó el régimen dictatorial, aunque sea transitorio; los que desconozcan la legitimidad de las Cámaras Legislativas, ó se dirijan á impedir su reunion ó sus deliberaciones; y los que conspiren contra la existencia del Poder Judicial, incitando á que sea atacado ó desobedecido;

3.º La publicacion de máximas, doctrinas ó noticias dirigidas á excitar á la rebellion, perturbar el orden público ó relajar la disciplina del ejército y armada.

4.º Toda incitacion para desobedecer alguna ley ó autoridad legítima, aunque sea por medio de sátiras ó inventivas;

5.º La publicacion de impresos contrarios á la moral, á la decencia ó á las buenas costumbres; y todo elogio ó apología de actos punibles ó prohibidos, presentados como meritorios ó laudables;

6.º Las injurias ó calumnias contra una ó mas personas, por medio de libelos infamatorios, caricaturas, alegorías ó emblemas claramente perceptibles, que tachen la vida privada, manchen el honor ó ofendan la buena reputacion.

Art. 9.º Son tambien delitos:

1.º La publicacion de noticias sobre operaciones militares, hecha en estado de guerra contra las prohibiciones de la autoridad política;

2.º La de las piezas oficiales de los sumarios criminales, mientras no se hayan terminado;

3.º La provocacion directa ó reiterada que se haga por medio de la prensa para cometer cualquiera de los crímenes ó delitos previstos en el Código Penal;

4.º Las publicaciones maliciosas de noticias falsas, documentos inventados, falsificados ó atribuidos falsamente á terceros, cuando la publicacion dañe los intereses del Estado ó de particulares;

5.º La divulgacion de hechos relativos á la vida privada que, sin ser injuriosos, puedan producir perjuicios á la familia á quien la publicacion se refiere.

Art. 10. Son faltas:

1.º La omision de las indicaciones mencionadas en el artículo 4.º de esta ley;

2.º La infraccion del artículo 5.º.

Art. 11. No se comete delito, ni falta en las publicaciones que censuran, critican ó imprueban la conducta oficial ó los actos de los funcionarios públicos, siempre que las imputaciones no sean calumniosas.

Art. 12. Ann cuando se ofrezca probar la imputacion injuriosa, se le aplicará la pena al autor ó editor del libelo infamatorio.

Art. 13. Si en algun escrito se imputasen delitos cometidos por empleado pública ó corporacion, por razon de sus funciones, y el autor ó editor prueban su aserto, quedan libres de toda pena.

## III.

### PENAS.

Art. 14. Los delitos contra la religion á que se refiere el inciso 1.º del artículo 8.º se castigarán con multa de cincuenta á doscientos soles. El que no pueda pagar la multa sufrirá arresto mayor desde el primero al segundo grado, segun la gravedad de los casos.

Art. 15. En cualquiera de los tres casos á que se refiere el inciso 2.º del artículo 8.º se aplicará la pena de multa de doscientos á quinientos soles, y la suspension de derechos políticos por dos años. El que no pueda pagar la multa sufrirá reclusion en primer grado.

Art. 16. En los casos enumerados en el inciso 3.º del artículo 8.º se impondrá la pena de multa de cien á



cuatrocientos soles y en su defecto la de arresto mayor del primero al cuarto grado.

Art. 17 La infraccion de que se ocupa el inciso 4.º del artículo 8.º se castigará con multa de cincuenta á doscientos soles, ó con arresto mayor en primer grado, pudiendo variar del primero al tercer término, segun los casos.

Art. 18 En el caso previsto por el inciso 5.º del artículo 8.º la pena será multa de veinticinco á doscientos soles, y subsidiariamente arresto menor del primero al quinto grado.

Art. 19 La infraccion prevista en el inciso 6.º del artículo 8.º se castigará, respectivamente, en las siguientes penas: 1.º Si la injuria fuese imputando un delito en que no tenga obligaciones de acusar el Ministerio Fiscal, se impondrá reclusion en segundo grado y multa de veinte á doscientos soles; 2.º Si la imputacion no fuese de delito, se impondrá la pena de reclusion en primer grado; 3.º El reo de calumnia será castigado con reclusion en tercer grado.

Art. 20 En el caso previsto en el inciso 1.º del artículo 9.º se aplicará la pena de carcel de uno á tres años, segun la gravedad del caso.

Art. 21 El que hiciere la publicacion á que se refiere el inciso 2.º del artículo 9.º pagará una multa de veinticinco á doscientos soles, y en su defecto arresto de veinte á sesenta dias.

Art. 22 La provocacion hecha por medio de la prensa á la perpetracion de crímenes ó delitos, prevista en el inciso 3.º del artículo 9.º se castigará con la pena correspondiente al cómplice del delito perpetrado, si este llega á consumarse. Si queda frustrado, se aplicará la pena de arresto mayor en quinto grado, ó reclusion en primero, segun la gravedad del caso, siempre que haya incitado á cometer los delitos de homicidio, incendio, robo ó traicion á la patria.

Art. 23 En el caso 4.º del artículo 9.º se impondrá la pena de reclusion de uno á tres años, siempre que la publicacion dañe los intereses del Estado; y la de arresto mayor de dos á seis meses, siempre que solo dañe intereses de particulares.

Art. 24 En el caso previsto en el inciso 5.º del artículo 9.º se impondrá la pena de multa de veinte á cien soles, y subsidiariamente arresto menor de diez á treinta dias.

Art. 25 Las faltas enumeradas en los dos incisos del artículo 10.º se castigarán con multa de diez á cincuenta soles y subsidiariamente con arresto menor de dos á diez dias.

#### IV.

##### DE LAS PERSONAS RESPONSABLES.

Art. 26. El impresor es inmediatamente responsable de los delitos y faltas que se cometan en las publicaciones que salgan de sus talleres.

Art. 27. Cesa la responsabilidad del impresor desde que exhiba ante el Juez el documento en que el editor de un periódico, folleto, libro ó cualquier otro impreso declara su carácter de tal; y cuyo documento debe conservar en su poder desde que contrate con una persona la publicacion.

Art. 28. El director de un periódico es responsable de los escritos que aparezcan en las secciones que no están á disposicion del público, y de aquellos que se publiquen en las secciones que están á disposicion de éste, siempre que no tuviesen autor determinado.

Art. 29. Para los efectos de ley:

Será *Impresor* el administrador sea ó no dueño del establecimiento en que resulte que se ha hecho la impresion;

Será *Editor* el que resultase legalmente haber costado y dispuesto la publicacion de impresos no periódicos;

Será *Director* el que resultase legalmente haber dispuesto la publicacion en los impresos periódicos;

Será *Autor* la persona que haya garantizado con su firma el original que sirvió para la publicacion.

Art. 30. El autor, editor ó director y el impresor deben ser vecinos del lugar, mayores de edad, y estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

Art. 31. Si el impresor no dá razon exacta de la morada del editor ó director, en su caso, ó si resultase que estos no tenían en el instante de la publicacion los requisitos del artículo precedente, será responsable del escrito denunciado. Igual responsabilidad pesará sobre el editor ó director, que incurriese en las mismas omisiones ó faltas, tratandose del autor.

Art. 32. Las traducciones serán consideradas como producciones originales para el efecto de hacer efectiva la responsabilidad de los traductores.

#### V.

##### DE LA PRENSA PERIÓDICA.

Art. 33. Antes de la publicacion de todo periódico se hará ante el



Concejo Municipal de la respectiva provincia, por el director ó impresor, una aclaracion por escrito, que contendrá: 1º el nombre y domicilio del director ó editor responsable; 2º el título del periódico; 3º el local de la imprenta; 4º el nombre del impresor. La Alcaldía Municipal acusará recibo ó constancia de esta declaracion.

Toda variacion sobre alguna de estas circunstancias deberá ponerse en conocimiento de dicha autoridad dentro de los cinco dias de acaecida.

Art. 34. En caso de contravencion á lo dispuesto en el artículo anterior, el propietario ó administrador, y en su defecto el impresor, pagará una multa de diez á cincuenta soles que se hará efectiva por la Alcaldía Municipal. El periódico no podrá continuar publicándose, mientras no se pague la multa y se subsane la omision que la hubiese motivado.

## VI.

### JURISDICCION EN MATERIA DE PRENSA.

Art. 35. En los juicios por delitos ejercen jurisdiccion:

- 1º Los Jurado; y
- 2º. Los jueces y tribunales ordinarios.

Art. 36. Las faltas previstas en los dos incisos del artículo 10, serán reprimidas por el respectivo alcalde municipal. Sus resoluciones serán revisables por la *Junta Directiva* del Concejo Provincial, á solicitud del interesado.

Art. 37. Las atribuciones y modo de proceder de las autoridades designadas en los artículos anteriores se detallarán en los capítulos siguientes:

## VII.

### JURADOS.

Art. 38. El primer dia útil del mes de Enero de cada año, los Concejos Provinciales, donde haya imprenta, elegirán las personas que ejerzan el cargo de jueces de hecho, en el orden siguiente:

Cincuenta en la capital de la República;

Treinta en las capitales de departamento ó provincias litorales;

Veintiuno en las capitales de provincia.

En caso de establecerse una imprenta después de la fecha indicada en este artículo, el alcalde del Concejo Provincial procederá tan luego que tenga conocimiento, á convocar á sesion de junta general para pro-

ticar la eleccion de los jueces de hecho.

Art. 39. Si hubiese imprenta en algun pueblo ó distrito, conocerá de las publicaciones que en ella se haga el jurado de la capital de la provincia.

Art. 40. Practicada la eleccion, el alcalde citará á los nombrados para la primera reunion de la junta particular del Concejo y les recibirá el siguiente juramento:

Jurais por Dios cumplir fielmente los deberes del cargo que vais á desempeñar, declarando con imparcialidad y justicia, en vista de los impresos y denuncias que se os presenten, si ha lugar ó no á formacion de causa. A lo que contestará el juez de hecho. Si juro: y el alcalde concluirá diciendo: si así no lo hicierais, Dios y la Patria os lo demanden.

Art. 41. Para ser juez de hecho se requieren, por lo menos las calidades que son necesarias para ser concejal y ciudadano en ejercicio.

Art. 42. No podrán ser elejidos:

1º. Los empleados y militares en actual servicio;

2º. Los concejales;

3º. Todas las personas comprendidas en el artículo 30 del Código de Enjuiciamientos en materia Civil.

Art. 43. El cargo de juez de hecho se irrenunciable, salvo en el caso de que el nombrado esté desempeñando dos cargos concejiles.

Art. 44. En causa determinada debe excusarse un juez de hecho de intervenir, si tiene con el acusado, ó con la persona responsable de la obra ó imprevisto denunciado, en caso de ser este conocido, parentesco espiritual, de consaguinidad dentro del cuarto grado, afinidad dentro del segundo ó enemistad notoria.

## VIII.

### QUIENES DEBEN Ó PUEDEN ACUSAR EN MATERIA DE PRENSA.

Art. 45. Tienen derecho de acusar por delitos de imprenta, segun la naturaleza de estos, las mismas personas á quienes acuerda tal derecho el Código de Enjuiciamientos en materia Penal.

Los agentes fiscales tienen obligacion de acusar por los delitos, salvo los casos de injurias y calumnias contra particulares.

Art. 46. La omision de los agentes fiscales en el cumplimiento de esta obligacion los sujeta á responsabilidad por inexactitud en el ejercicio de sus funciones. En igual responsabilidad incurriran siempre que no vigilen por el exacto cumplimiento de los artículos 4º y 5º de esta ley.



Art. 47. En los lugares en que no haya agente fiscal, cumplirán las atribuciones á que se refiere el artículo anterior, los síndicos municipales.

## IX

## DE LOS JUICIOS.

Art. 48. Los funcionarios y las personas que tienen la obligación y el derecho de acusar, conforme al título anterior, se presentarán por escrito al alcalde municipal, denunciando el impreso que contuviese el delito de imprenta. Se acompañará dicho impreso y se puntualizará las palabras, frases ó signos que se estimen infractorios de la ley.

Art. 49. Presentada la denuncia el alcalde asistido de dos concejales y del secretario de la corporación, procederá á sortear en público del total de los jueces de hecho de que se ocupa el artículo 40, siete para que formen el jurado. El acta de sorteo se sentará en un libro especial destinado á ese fin, y en el expediente.

Art. 50. El alcalde convocará en seguida á los miembros del jurado para que dentro de cuarenta y ocho horas concurran al salón de sesiones del concejo.

Art. 51. Al juez de hecho que dejare de asistir en el día y hora citados, sin impedimento legal, se le impondrá una multa de veinte á cincuenta soles, que doblará en caso de reincidencia.

El juez de hecho que deje de concurrir por tres veces consecutivas al jurado, habiendo recibido citación oportuna, será depuesto del cargo y reemplazado por elección del concejo, sin perjuicio de pagar las multas, no bajando la tercera de cincuenta soles.

Art. 52. Reunidos los jueces de hecho que forman el jurado, serán examinados por el alcalde acerca de si tienen ó no algun impedimento legal para conocer de la denuncia.

Art. 53. Si alguno ó algunos resultaren impedidos, se les reemplazará en la misma forma expresada en el artículo 49.

Art. 54. Calificada la idoneidad de los jueces, el alcalde se retirará inmediatamente de la sala.

Art. 55. Los jueces examinarán la obra ó impreso denunciado y declararán si hay ó no lugar á formación de causa. Se requiere la mayoría absoluta de votos, para cualquiera de esas declaraciones.

Art. 56. La declaración se extenderá al pié de la denuncia y será

firmada por los siete jueces. El primero en el orden del sorteo hará de presidente, quien entregará el expediente al alcalde.

Art. 57. El secretario del concejo llevará un libro en el que deje copia del acta del jurado y un extracto del escrito de denuncia.

Art. 58. Si la declaración fuese *no ha lugar á formación de causa*, se archivará lo actuado en la secretaría del concejo, pudiendo darse á los interesados las copias que pidieren.

Art. 59 Si la declaración fuese *ha lugar á formación de causa*, el alcalde pasará el expediente al juez de derecho.

Art. 60 Recibido por el juez del crimen el expediente, procederá inmediatamente al secuestro provisional, conforme al artículo 76 y siguientes; y mandará notificar al impresor que presente dentro de veinticuatro horas el documento á que se refiere el artículo 27, y el editor, el original con la debida garantía.

Si el impresor, editor ó director, en su caso, no cumpliese con presentar el documento, que le respecta, conforme á este artículo en el término fijado, se seguirá el juicio contra él y se hará efectiva, en su persona, la responsabilidad de que se ocupa el artículo 31.

Art. 61 Presentado el original se mandará comparecer á la persona que lo firmó ó garantizó, á fin de que preste su declaración. Si el que aparece firmando el original negase su firma, ó tanto éste como el agraviado ó denunciante señalase otra persona como responsable, el juez recibirá á prueba el incidente por ocho días perentorios y con todos cargos, vencidos los cuales resolverá, previa audiencia del Ministerio Fiscal, quien aparece como persona responsable.

Cuando aparezca responsable alguna persona que no esté sujeta á la jurisdicción de los jueces de 1.<sup>a</sup> instancia, se pasará el expediente al Tribunal ó Onerpó que deba juzgarlo, conforme al artículo 64 de la Constitución y al Código de Enjuiciamientos en materia penal: absteniéndose el juez ordinario de decretar la prisión.

Art. 62 En el mismo auto en que se declare quien es la persona que aparece como responsable, se ordenará su prisión.

Art. 63 El reo puede libertarse de la prisión dando fianza de haz conforme á ley.

Art. 64 Puesto en prisión el reo ó admitida y formalizada la fianza en su caso, se entregarán los autos al denunciante para que formule la acu-



sacion dentro de cuarenta y ocho horas.

De la acusacion se correrá traslado al reo por cuarenta y ocho horas.

Absuelto por el reo el traslado de la acusacion ó su rebeldía, se pedirá dictámen al Agente Fiscal, si éste no hubiese sido quien hizo la denuncia.

Art. 65. Llenados los trámites del artículo anterior, el juez de derecho procederá á pronunciar sentencia absolviendo ó condenando al reo. En estos juicios no hay absolucion de la instancia.

Art. 66. Toda sentencia condenatoria contendrá claramente la calificación del delito.

Si el reo no estuviese presente en el lugar del juicio, el juez lo llamará por edictos y le nombrará defensor con el que seguirá la causa hasta que se pronuncie la última sentencia, que se reservara hasta que pueda ser apelada cuando se presente el reo.

Art. 67. La sentencia condenatoria se publicará á costa del reo, en el periódico que el juez designe; y en caso de tratarse de artículo de periódico, en el mismo que hizo la publicacion condenada.

Art. 68. En estos juicios hay lugar á la apelacion en los casos en que es permitido por las leyes comunes, pero el recurso de nulidad solo se admitirá cuando se interponga contra el fallo definitivo.

Art. 69. En los casos de injurias (ó calumnias) contra particulares, el juez de derecho citara á conciliacion á las partes dentro de veinticuatro horas, despues de averiguada la persona responsable y antes de entregar el expediente para formular la acusacion. Si no resultase avenimiento ó no compareciese alguna de las partes, se dará la conciliacion por intentada.

Art. 70. En los casos de calumnia contra particulares ó contra funcionarios públicos, se recibirá la causa á prueba por veinte dias fatales, perentorios y con todos cargos.

En estos juicios no podrá concederse por ningun motivo prórroga, término de la distancia ni actuacion de diligencia que prolongue los veinte dias concedidos en este artículo, bajo pena de nulidad y responsabilidad.

Art. 71. Vencido el término de prueba á que se refiere el artículo anterior, el juez pronunciará sentencia, condenando al calumniante, si se prueba que el calumniado no cometió el delito, ó que ha espirado el tiempo de la prescripcion, ó que se halla remitido por otro medio legal. En caso contrario lo absolverá, man-

dando á la vez que continúe el juicio contra el querellante, y se tendrá lo actuado como sumario.

En estos juicios se observaran las disposiciones del código de enjuiciamientos penal; en cuanto sean aplicables y no se opongan á la presente ley.

## X.

### PASQUIN. S.

Art. 72. Para los efectos de esta ley se considera pasquin todo impreso que se hace circular ó se fija en lugar público, sin las indicaciones del artículo 4º, siempre que contenga espresiones satíricas, alusiones directas ó indirectas á los poderes ó autoridades constituidas, insultos ó manifestaciones hostiles contra algun particular, corporacion ó autoridad, ó sean atentatorias á la moral ó buenas costumbres.

Art. 73. El pasquin no goza de ninguno de los privilegios acordados á la prensa y los autores y cómplices de su publicacion y circulacion, sufrirán la pena de reclusion, uno á cinco años, en todo caso, y los cómplices la mitad.

Art. 74. Siempre que se trate de pasquin tiene obligacion de acusar el ministerio fiscal y cualquiera autoridad política.

Art. 75. Entablada la acusacion se procederá por los trámites del juicio criminal comun.

## XI

### DEL COMISO Ó SEQUESTRO

Art. 76. Tan luego como el juez de derecho reciba el expediente de la declaracion de haber lugar á formacion de causa, se procederá al sequestro ó comiso del impreso ó obra denunciada, procediendo por cuerda separada de lo principal.

Art. 77. El sequestro se extiende no solo á todos los ejemplares del impreso, grabado, ó cualquier otro objeto denunciado, sino tambien á las planchas, moldes, piedras y matrices destinadas á reproducirlos.

Quando se trate de impresos tipográficos, no se secuestraran las formas, sino que se ordenará la inmediata distribucion de la composicion.

El impresor está obligado á exhibir el original del pasquin que haya publicado, tan luego que lo ordene el juez de la causa.

Art. 78. No se podrá secuestrar sino los ejemplares que existan en poder del autor, editor ó impresor, así



como los que se encuentren en librerías ó puesto de venta; notificándoles además que se abstengan de retener ó vender ejemplar alguno.

Art. 79 Los infractores del artículo anterior serán inmediatamente castigados con una multa que equivaiga al precio de quinientos ejemplares.

Art. 80 Los objetos secuestrados se pondrán en depósito durante el juicio.

Art. 81 Toda sentencia condenatoria dispondrá la destrucción de los objetos secuestrados.

Serán estos devueltos á sus respectivos dueños si la sentencia es obsoletoria.

Art. 82 Las autoridades políticas ó de policía pueden tambien ordenar el secuestro provisional en los casos siguientes:

1º Si es impresor no lleva las indicaciones del artículo 4º y puede calificarse de pasquin. En este caso pondrán las especies secuestradas á disposicion del juez de derecho.

2º Si se distribuyen, fijan ó exponen en público proclamas ú otros impresos, grabados y demás objetos que provoquen ó oxiten á la perpetracion de un hecho punible. En este caso darán cuenta al Ajente Fiscal para que entable la denuncia ó acusacion respectiva; y declarado justificable el impreso, pondrá todo lo secuestrado á disposicion del juez de derecho.

Art. 83 Lo dispuesto en el artículo 75 tiene tambien lugar en los juicios por pasquines; debiendo declarar el secuestro ó comiso directamente, el juez de derecho.

## XII.

### PRESCRIPCION EN MATERIA DE PRENSA.

Art. 84 El derecho de acusar por delitos de prensa, ó sea la accion para denunciar un impreso como justificable, prescribe á los seis meses, contados desde el día en que el impreso se puso en circulacion, ó que se hubiese efectuado el último acto del procedimiento, siempre que se trate de delitos en que tiene obligacion de acusar el Ministerio Fiscal.

Art. 85 Quando se trate de impresos en que se injurie ó calumnie á particulares, el derecho de acusar prescribirá á los tres meses para los presentes y á los seis para los ausentes.

Art. 86 La pena prescribirá dentro de los términos señalados, segun los casos, en el Código Penal.

Art. 87 La pena de multa prescri-

birá al año de haberse ejecutoriado la sentencia que la impuso.

### Comuníquese &.

Para que los señores senadores pudiesen estudiar el proyecto, se acordó aplazar el debate hasta la próxima sesion.

Se leyó y puso en debate el dictamen de la comision principal de hacienda, en el oficio del presidente de la Corte Superior de Arequipa para el pago de sueldos atrasados; y en que opina la comision porque se considere en el presupuesto general, la suma correspondiente para satisfacer á los vocales y empleados judiciales de ese departamento, los sueldos dejados de percibir desde el 1º de Enero de 1887 hasta el 31 de Mayo del presente año.

El señor *Arbulú*.—En las condiciones del departamento de Arequipa, entiendo que estan muchos departamentos de la República; por consiguiente, si esta disposicion es conveniente y legitima, debe hacerse extensiva á todos los departamentos. Solo así podría aceptarse; porque de otra manera será dar un mal ejemplo: las contribuciones no se cobran ya en los departamentos, y los presupuestos que vienen con superavit, por lo menos de un cincuenta por ciento.

El señor *Valdez*.—Yo pregunto, Excmo. señor, se ha oido en este asunto al gobierno? Yo desearia saber cuales son las razones porque no alcanzan los fondos en Arequipa. El gobierno está en la obligacion de hacer cumplir las leyes que se dictan; y si es cierto que la contribucion personal no se ha cobrado, sería bueno saber porque no se ha cobrado, porque unos departamentos cumplen con las leyes y otros nó. En fin, deseo saber si la contribucion personal en el departamento de Arequipa se cobra, y porque no estan pagados estos empleados de la nacion, para lo cual sería conveniente que se oyera al gobierno.

El señor *Presidente*.—El honorable señor Valdez pide que se pida informe al gobierno?

El señor *Valdez*.—No puedo resolver este asunto sin antecedentes, y deseo saber cual es la causa de ese deficit en un departamento tan importante como Arequipa; saber si realmente sus rentas no alcanzan para cubrir sus gastos; y para esto debe oirse previamente al gobierno.

El señor *Garcia Calderon*.—Excmo. señor: Hay dos observaciones con



respecto al dictamen, la una propuesta por el honorable señor Arbulú, y la otra por el honorable señor Valdez.

Dice el honorable señor Arbulú que si se accede al pedido de la Ilma. Corte Superior de Arequipa, á la resolución legislativa que en favor de ella se dicte, se debe agregar otras tantas, ó dar una resolución general; para todas las cortes de los diversos departamentos de la República. Esta observación del señor Arbulú sería justa, si todos los departamentos estuvieran en la misma condición del departamento de Arequipa; pero eso no sucede con los otros departamentos. En el departamento de Arequipa, se han hecho gastos extraordinarios; y según se dice por la junta departamental, se le ha dado á las rentas del departamento una aplicación distinta de la que debía haberselas dado. Cuando todos los empleados de ese departamento están pagados, no lo está el poder judicial; porque parece que hubiera habido el deseo especial de que ese poder no ganara sueldo.

Según aparece del expediente, la cantidad de cuarenta y tres mil soles á que asciende la liquidación, está justificada por la Ilustrísima Corte Superior de Justicia. El Presidente de ella se presentó al prefecto del departamento pidiendo la liquidación de los sueldos que se le debían desde el 1.º de Enero de 1887, es decir, de cuatro años atrás; y resultó que en esos cuatro años, no han recibido ni la quinta parte de sus sueldos. El Gobierno, hace veinte días ó un mes, ha tenido que enviar aquí diez mil soles de las rentas generales para dar un auxilio á esos vocales, que en cuatro años no han recibido nada, y no sé cómo no se han muerto de hambre, puesto que no han podido dedicarse á otra cosa, teniendo que ocuparse de la administración de justicia. Uno de los vocales que vino á Lima por motivos de salud, recibió á cuenta diez mil soles que es lo único que han tenido durante cuatro años, y gracias á eso es que se les ha dado la quinta parte del sueldo. Con esta cantidad han vivido hasta ahora. La liquidación, tal como la han formado las oficinas, asciende á cincuenta y tantos mil soles; pero con los diez mil soles que les dió el Gobierno, han podido recibir un sueldo, y creo que será la primera vez en cuatro años que han recibido un sueldo íntegro.

Si las rentas del departamento de Arequipa han sido aplicadas á otros

objetos, ó han sido distraídas, es al Gobierno á quien toca averiguarlo y castigar á los que resulten responsables; pero mientras se sigue el juicio y se castiga á los responsables, no es posible dejar abandonados á funcionarios que han prestado sus servicios al país.

Esta es la situación del departamento de Arequipa. En otros departamentos no ha existido la lucha sorda, y á veces abierta, que ha existido entre la junta departamental y el prefecto de Arequipa: esa lucha ha impedido que funcione la junta departamental y que pueda atender á la recaudación de las rentas y á la inversión misma; y la primera vez que la junta departamental se pudo reunir, descubrió un desfalte de doscientos y tantos mil soles, el que se ha tratado de explicar ante el Gobierno. He visto alguna de las explicaciones que se hace del modo siguiente: el prefecto en lugar de disponer que la recaudación de las rentas se entregase al tesorero del departamento; para que llevase la cuenta de ellas, estableció el sistema de girar libramientos contra los apoderados fiscales; por consiguiente, cada apoderado fiscal tiene una cuenta de fondos recaudados que no aparece en la caja fiscal. Cuando se liquide esta cuenta, se verá la existencia de esos fondos; pero mientras tanto la víctima de este desorden es el Poder Judicial.

Esta disposición que discutimos no vendrá á producir sus efectos hasta el año entrante, cuando el Presupuesto general esté aprobado. Si hay entonces rentas para el Poder Judicial, no se dará el auxilio; pero si las rentas no bastasen, á pesar de que ha sido cambiado el personal administrativo de Arequipa, con lo que tomarán las cosas otro rumbo, entonces producirá su efecto la cesión que la Comisión propone. Si las rentas alcanzasen no se ha hecho más que dictar una medida que no tendrá aplicación en la práctica.

Pedir informe al Gobierno sobre el particular es cosa inútil; porque ya se han reiterado las quejas de la Corte Superior, y yo mismo he pedido otra vez se pasase oficio al Gobierno exigiéndole que se mandase pagar á los vocales de la Corte de Arequipa; pero el Gobierno ha contestado que se habían dado las órdenes convenientes al Prefecto, y el Prefecto no ha obedecido las órdenes del Gobierno, por causas que no puedo comprender; y el hecho es que no se ha verificado el pago.

El Prefecto alega como razón, en



su parte, que la subvencion que debía mandar la Junta Departamental de Moquegua para el pago del Poder Judicial, no la ha mandado; pero aún cuando eso hubiera sucedido, siendo esta subvencion de tres mil soles anuales, en cuatro años serían doce mil soles, y lo que se adeuda á la Corte de Arequipa asciende á cuarenta y tres mil soles. Todo esto tendrá que esclarecerse en debida forma; pero no hagamos víctimas inocentes. De las averiguaciones que se hagan resultará si ha habido abuso de parte de la Junta Departamental, ó si esa cantidad ha desaparecido en gastos extraordinarios; pero en todo caso, la víctima de esos hechos sería siempre el Poder Judicial que ha cumplido con sus deberes.

La necesidad del informe del Gobierno no podría tener otra explicacion que la comprobacion del hecho; pero éste está comprobado con documentos oficiales; porque consta de la liquidacion practicada de orden del Prefecto, y luego las quejas reiteradas que han venido á la H. Cámara contra el Prefecto, acreditan el desorden que existe en los pagos, y que éste no se ha hecho; haciéndose necesario atender á él. Así es que, ya sea, como la Corte dice con sobrada prudencia, porque no se han recaudado las contribuciones presupuestadas, ya sea porque á la recaudacion se le ha dado aplicaciones diversas, el hecho es que en la realidad hay déficit en el Presupuesto, y ese déficit debe llenarse con las rentas generales.

Si nosotros dijéramos que inmediatamente se paguen los cuarenta y tantos mil soles para mandarlos á Arequipa, podría argumentarse con la deficiencia de fondos; pero como en cierto modo no damos sino una promesa de pago para el año próximo, cuando esté en vigencia el nuevo presupuesto, época para la cual el Gobierno podrá remediar la violenta situacion que se ha creado en Arequipa, se aplicará ó nó la partida del presupuesto, segun las circunstancias.

La peticion de informe al Gobierno aplazaría este asunto, que se hace sobrado grave; porque, fije su atencion la H. Cámara en que los empleados todos del departamento de Arequipa están pagados, excepto el Poder Judicial. ¿Qué explicacion puede darse á ese hecho? El mismo Prefecto ha manifestado que la gendarmería y todos los empleados que constituyen la administracion pública están pagados con el día, y á la Corte se debe casi íntegramente sus

suelos de cuatro años, cosa que no tiene explicacion posible, y que no puede haber sucedido en ninguno de los departamentos; porque si hay alguno en donde haya habido déficit ó se ha cometido desfalco, allí no habrán recibido sueldos íntegros, pero se les ha pagado algo. Pero en el departamento de Arequipa, donde no se les ha pagado sino una cosa insignificante, se ha creado una situacion tan normal, tan excepcional que es necesario buscar medios extraordinarios para remediarla. Por estas razones pido á la H. Cámara se sirva dispensar su voto al dictamen de la comision Principal de Hacienda.

El señor Valdez.—Las razones que he escuchado al H. señor García Calderon me han traído el convencimiento de que debemos tratar esta cuestion con un poco mas de reflexion. Su señoría, al contestar al H. señor Arbulú, nos ha dicho que no es cierto que dictando esta ley se causaría una perturbacion; porque no es cierto que hubieran departamentos que se encontraran en esa misma condicion, puesto que solo en Arequipa resultaba ese déficit. No es esto completamente exacto; precisamente existe en la comision á que pertenezco, una proposicion de los señores Lama T. y Morote, con igual pedido, para el departamento de Ayacucho; y ayer se ha pedido informe al Gobierno á ese respecto. Ese informe no dejará de ser muy útil porque parece que en Ayacucho no ha podido recaudarse la contribucion personal. Existen, pues, ya otros departamentos que vienen reclamando el mismo pago; y es de presumirse que hayan otros departamentos como ha dicho el H. señor Arbulú, en la misma condicion.

Ahora bien, Excmo. Sr., reflexionemos si estamos en el caso de dictar leyes que dificulten la recaudacion de las contribuciones. Es posible, que nos lancemos, por consecuencia de una malísima administracion, á dar una resolucion inconulta que lejos de estimular al pago de la contribucion, servirá de aliciente para que los departamentos que la están pagando bien se conviertan en morosos?

Ademas subsiste lo que ha dicho el H. señor Arbulú: que si nosotros dictamos esta ley ella causaría una gravísima perturbacion; porque no se podría considerar en ella solamente al departamento de Arequipa, cuando hay otros departamentos que se encuentran en las mismas condiciones.

Veamos ahora el segundo punto: la razon por que no se paga. No se nos



ha dicho, ni podemos saberlo de una manera evidente, si es porque no hay fondos en el departamento de Arequipa. El H. Sr. García Calderón nos dice que todos los empleados están pagados, á excepción del Poder Judicial; entonces esto quiere decir que ha habido malversación de fondos. Y entonces, como vamos á dictar una ley por consecuencia de una malversación, cuando el deber del legislador sería hacer efectiva la responsabilidad de las autoridades que hayan causado esa malversación? Eso sería lo lógico; pero ¿cómo vamos á dar una ley para que de las rentas generales se atienda á esos gastos por consecuencia de que las autoridades han distraído esos fondos? Al concluir sus apreciaciones el H. Sr. García Calderón, nos decía que no vamos á conseguir una cantidad para que inmediatamente se pague lo que se debe, sino que esta ley importa solo una promesa, cosa que no es aceptable, porque si se trata de promesas, ¿qué cosa mejor que la promesa de recaudar las contribuciones? Si esos fondos departamentales se han tomado tal vez para gastos de carácter general, nada mas sencillo, que se remedie el mal devolviendo esa cantidad tomada en préstamo. Pero que nosotros vayamos á dictar una ley. Excmo. Sr., para remediar abusos de malversación, me parece que con ello perdería algo el alto prestigio del Senado. No creo, Excmo. señor, que las malversaciones de una mala administración se remedien con leyes de esta naturaleza, y mucho mas, cuando ha dicho el H. señor Arbulú, vamos á dar una ley de carácter especial, un verdadero privilegio en favor de un departamento, cuando existen otros en idéntica situación, y prueba de ello es, que he manifestado al H. Senado, que ayer he pasado el proyecto de los HH. señores Lama y Morote para que el Gobierno se sirva expedir su informe.

Creo que estas razones no pueden menos de pesar en el ánimo de los señores que me escuchan, y creo que perfectamente se pueden remediar aquella situación administrativamente. Se nos ha dicho, repito, que se han malversado esas rentas, aunque no se ha pronunciado esa palabra; pero se comprende. Se han distraído se ha dicho, y ¿en qué se han distraído? Si ha sido en gastos generales debe exigirse administrativamente que se devuelvan esas cantidades tomadas en préstamo; y si se han distraído para gastos particulares, lo que se llama defraudación, entonces administrativamente tambien debe

hacerse efectiva la responsabilidad. Pero nosotros no podemos ocuparnos de este asunto, ni en el caso de defraudación ni en de malversación. Por estas consideraciones yo desearía que se pidiese informe al gobierno y pido que así se consulte á la Oámara.

El Sr. Presidente.—Su señoría propone esa cuestion prévia?

El Sr. Valdez.—Pido que se oiga al gobierno antes de dar esta ley.

S. E. hizo la consulta y la Oámara la resolvió afirmativamente.

En consecuencia quedó aplazado el proyecto hasta que informe el Ejecutivo.

Después de lo cual, y siendo la hora avanzada S. E. levantó la sesión.

Por la Redacción.

MANUEL M. SALAZAR.

43.<sup>a</sup> sesión del Viernes 17 de Setiembre de 1890.

(Presidida por el H. señor Valle.)

Abierta la sesión con asistencia de los señores Senadores Quifiones, Ibarra, Eguera, Rosas, Bambarén Samanés, Torrico, García Calderón, Recabarren, Carranza, Morote, Lama T., García, Villanueva, Alarco A., Mujica, Castillo, Torres, Muñoz, Villagarcía, León, Olavegoya, Oardenas, Izaga, Arbulú, Cisneros, Ganzoza, Catevaro, Revoredo, Najer, Lama G., Varela y Valle, Vélez, Seminario, Montero, Ocampo, Valdez, Bejarano, Forero, Ward, Vizcarra, Pinzas y Eguighen Secretarios, fué leída y aprobada el acta de la anterior.

Se dió cuenta de los siguientes documentos:

#### Oficios.

Del señor Ministro de Justicia, participando que para satisfacer el pedido que se le ha hecho por esta H. Cámara á indicación del señor Carranza acerca del estado en que se encuentra el juicio mandado seguir á los autores y cómplices del asesinato perpetrado en la persona del Dr. Urbina y sobre el se ha librado órden de prisión contra don Pío Carrasco y otros, se han dictado las órdenes convenientes para obtener á la mayor brevedad los datos precisos sobre el particular.

Al archivo con conocimiento del señor Carranza.

De S. E. el Presidente de la H. Oámara de Diputados, acompañando